

Operativos cívico-militares y ciclo de protestas: periferia y control territorial en Chile (1982-1986).

Robinson Silva Hidalgo¹

Resumen

Luego de la primera etapa de persecución férrea contra la oposición al régimen dictatorial, instaurado en septiembre de 1973, el movimiento social popular comenzó a retomar grados de organización y hacia mediados de la década de los ochenta, fue capaz de intervenir en el desarrollo del proceso político.

Una de las políticas que ilustró el control del territorio fue la ocupación del espacio público mediante la legalidad impuesta, expresada en los estados de excepción; en la periferia de las grandes ciudades esto se reforzó mediante la intervención social de militares y civiles adeptos al régimen.

La significación de las prácticas resistentes en lo político y social se situaron tras la emergencia del ciclo de protestas producido entre 1982 y 1986, forma protagónica del descontento contra el régimen dictatorial y que se articuló entre la memoria y el argumento político coyuntural.

Es así como se produjo una disputa por la apropiación del espacio público, a través de su significación para la manifestación política en el ciclo de protestas, que el movimiento social popular valora como legítimo y la represión combate, mediante la represión y mecanismos como los operativos cívico-militares.

¹ Docente del Instituto de Historia y Ciencias Sociales de la Universidad Austral de Chile-Valdivia.

Operativos cívico-militares y ciclo de protestas: periferia y control territorial en Chile (1982-1986).

Presentación

En este texto analizaremos las acciones denominadas operativos cívico-militares, que se dieron durante casi la totalidad del período estudiado, aminorando su ocurrencia hacia fines de la dictadura. Entraremos en una práctica social y política del régimen militar que se ha estudiado muy poco, por lo tanto no tenemos mayor información de la bibliografía especializada.

Definimos las protestas nacionales de los ochenta como un ciclo (Salazar, 2012) ello porque consideramos las quince convocatorias hechas por agrupaciones sindicales, sociales y políticas en un período delimitado de tiempo. Los objetivos y definiciones que se argumentaron a favor de estos llamados fueron acotados y referido a identificar claramente un movimiento opositor al régimen de facto. En ese contexto nos interesa analizar el rol de los operativos cívico-militares.

El análisis que emprendemos lo hemos organizado en diferentes aspectos que nos interesa desarrollar, comenzaremos por explicar qué se entendió por estos operativos y la definición del gobierno a través de sus políticas sociales. Proseguiremos estudiando la participación de las organizaciones civiles involucradas en estas actividades, particularmente las instituciones de jóvenes y mujeres.

El rol de los municipios y otros funcionarios de estado también tienen un espacio en nuestra investigación. Los militares y policías por su parte, continúan en el proceso de indagación, veremos cómo se comportan en diversos momentos y las motivaciones que llevan a los cuerpos armados a participar en estas acciones. Finalmente incluiremos algunos hechos políticos asociados a operativos cívico-militares, para comprender de manera cercana el rol político de estas intervenciones.

Los operativos cívico-militares fueron acciones destinadas a palear diferentes deficiencias en los barrios más pobres de las ciudades y sectores rurales del país.² Consistió en desplazar un contingente militar que, en conjunto con organizaciones

² Alberto Cardemil, subsecretario del interior del gobierno, se refirió en *El Mercurio* del 24 de septiembre de 1987, a los operativos cívico militares. Explicándolos jurídica y políticamente, en la oportunidad desmintió cualquier afán político en los operativos a través de la instrumentalización de las municipalidades, cuestión que fue denunciada a la Contraloría General de la República e hizo que la autoridad saliera a explicarlo.

civiles, intervinieron los barrios marginales por un corto período de tiempo, generalmente un día o dos, realizando actividades de ayuda social, como cortar el pelo o hacer revisiones médicas, hasta reparar algunas averías en las casas de los pobladores o atender a los animales de compañía.

Las diversas ramas de las fuerzas armadas participaron de esta manera de intervención de espacios y de cuerpos ciudadanos. En esta medida también lo hizo el contingente de carabineros, los cuales fueron protagonistas de los operativos, pues se encontraban en alianza con los sectores comprometidos políticamente con el régimen, como las secretarías y organizaciones de ayuda social.

Dependiente del Ministerio del interior, la dictadura redefinió la Oficina de Emergencia para atacar los problemas sociales más urgentes. Este organismo se propuso objetivos altísimos en sus primeras declaraciones hacia fines de 1973, como erradicar la pobreza extrema del país gracias a la cooperación cívica y la colaboración de la empresa privada, cuestión que no cuajó en los años venidos, pues carecía de planificación y estrategias para lograrlo:

Esta instancia gubernamental definió un discurso claramente político para llevar a cabo su acción: declaró su absoluta prescindencia de proselitismo en las acciones que llevaría a efecto, colaborando con las diversas instancias cívicas de apoyo a su labor. Por esta razón, en un primer momento se dedicó específicamente a entregar alimentos. En relación a lo anterior, recordemos que una de las críticas más difundidas contra la administración Allende fue la escasez de alimentos, por tanto el nuevo régimen se esmeró en solucionar rápidamente el tema de abastecimiento de los mercados.

En los primeros años de la dictadura, el discurso de reconstrucción nacional utilizó a los militares y policías como los sujetos fundamentales de la acción política y social; en lo sucesivo se llamó a los civiles para integrar el dispositivo de intervenciones que comportaron los operativos cívico-militares:

Hombres abriendo canales en las comunas de Santiago o mujeres empaquetando alimentos en La Granja son algunos de los efectos de la Campaña Nacional Social puesta en marcha por el Gobierno. Siete Ministerios (Interior, Defensa, Economía, Hacienda, Vivienda, Salud y Educación) junto con la Secretaría General de Gobierno, la Oficina de Planificación Nacional, Intendencias, Gobernaciones y Municipalidades enfrentan la tarea de movilizar el país. Para el ministro del Interior, general de división César Raúl Benavides, en el operativo intervienen desde el Presidente de la República hasta los organismos de base que son las alcaldías de las 286 comunas existentes.

El martes 10 se reunieron en Santiago 200 delegados: Intendentes, gobernadores y alcaldes de la capital y Valparaíso y numerosos funcionarios del Estado para estudiar los alcances del Plan. Este se originó en un oficio -12 de mayo- del Presidente de la República al ministro del Interior para que en 72 horas se coordinara un programa destinado a “aliviar la situación de los más

desposeídos, en especial la de los niños y las madres de familia (*Ercilla*, N° 2081: 9).

Los operativos cívico-militares tomaron un carácter relevante en el contexto de los intentos de constitución del movimiento cívico, engranaje político destinado a dar soporte al régimen de Pinochet. Con lo anterior observamos que el entramado de fuerzas militares y de orden ejerció un discurso que estuvo muy lejano a la derecha y que, por lo mismo, el gremialismo incorporó fuertemente a su acción política.

El movimiento de pobladores, ya sea en la lucha por la vivienda o por la mejora de las condiciones de vida en los barrios, había sido un elemento central en las estrategias de la izquierda chilena durante gran parte del siglo pasado. Así, las intervenciones en el espacio poblacional vinieron a sustituir al mediador político, haciendo de los militares y el asistencialismo de la derecha pinochetista nuevos operadores en el barrio, disputando ese rol con sectores organizados por el movimiento de resistencia, fundamentalmente a través de la iglesia católica (Chateau, 1987; Salazar, 2012).

Actores civiles y militares involucrados en los operativos

Entre los actores que protagonizaron estas intervenciones en el espacio popular, fueron las organizaciones juveniles uno de los focos más activos. Estas organizaciones estuvieron particularmente presentes en la etapa de los planes de acción gubernamental, destinadas a la erradicación de los asentamientos más pobres hacia sectores periféricos de las ciudades, coincidente con los primeros años de la dictadura hasta 1980, que representó el diseño definitivo del nuevo estado neoliberal.

La evidencia muestra que se produjo una relación directa entre la juventud derechista, los operativos cívicos y la fecha en que se celebró la batalla de La Concepción (7 de julio), a la sazón el día de la juventud y el juramento a la bandera. Estos elementos hacen de estas fechas un momento predilecto para la realización de operativos por parte de las agrupaciones juveniles adeptas o parte del régimen. Ejemplo de lo anterior es julio de 1982, cuando un operativo de la Secretaría Nacional de la Juventud fue realizado en Ovalle, Coquimbo, remarcando actores y significados a través de la “acción social” mancomunada con el municipio, organismos públicos y bomberos.

Los estudiantes de la Universidad de Chile realizaron un convenio con la municipalidad de San Miguel, Santiago, para colaborar con atenciones médicas a los pobladores de la comuna. En esta oportunidad no observamos militares ni otras

instituciones involucradas, si no que los estudiantes reforzaron de modo directo su colaboración con el ente encargado de la acción social. Con todo ello vemos entonces que las municipalidades se erigieron como el eje de las acciones de ayuda social desde fines de los setenta y hasta acabada la dictadura.

En septiembre de 1984 los estudiantes de la casa de estudios estatal generaron acciones de ayuda social en la población Carol Urzúa de Puente Alto, Santiago. Las atenciones médicas que se realizaron fueron llevadas a cabo sólo por estudiantes. Lo que llama la atención de esta actividad es que se llevara a cabo en un barrio designado con el nombre de una de las principales bajas de la dictadura a manos de la resistencia armada, el Intendente de Santiago.

La Secretaría Nacional de la Juventud reapareció hacia 1983 para enfrentar el ciclo de protestas nacionales a través de los planes de acción social. En los meses de junio y julio de 1983 la secretaría coordinó acciones en diversos barrios periféricos de Santiago. En estas ocasiones la institución destacó el aporte de la juventud al país, oponiendo directamente esta idea a la destrucción que provocaban las protestas, según el discurso derechista:

El Secretario Nacional de la Juventud, Patricio Melero, anunció la realización ayer de un vasto "Plan de Acción Nacional" que se extenderá entre el 15 de junio y el 18 de julio, y cuyo slogan será "En los momentos difíciles, la Juventud Construye". "En él participarán los jóvenes, que sin posponer su legítimo derecho a discrepar, no quieren ser instrumentalizados por una protesta que consideramos inconducente e irresponsable", señaló Melero...

El sábado 25 de junio, los jóvenes realizarán visitas a los hogares de ancianos y de menores; el sábado 2 de julio se dedicaran al hermoejamento de plazas y jardines de la Región Metropolitana; entre el 9 y el 12 de julio se procederá a la construcción y restauración de multicanchas; y entre el 12 y el 18 de julio se realizarán exposiciones de los trabajos efectuados, en los Talleres Laborales de la Secretaría, en Pudahuel, La Florida, Renca, La Granja y Conchalí (*El Mercurio*, 12-06-1983: C3).

La Secretaría hizo colaboraciones de este tipo en ocasiones de emergencia, como por ejemplo en 1984, cuando la crecida de un río dejó miles de damnificados en Lampa y otras zonas de Santiago. Esta vez no hay participación de funcionarios públicos ni militares en las tareas.

En septiembre de 1985, grupos de jóvenes universitarios realizaron operativos cívicos en Bатуco, Santiago, en conjunto con organismos públicos. Cabe destacar que si bien no hubo presencia de militares, estos dotaron de elementos clínicos a los jóvenes. La prensa informó que el motivo del operativo fue la celebración del día internacional de la juventud.

Como podemos observar, los grupos de jóvenes, representados por organismos

públicos o universitarios, utilizaron el operativo cívico como forma de apoyo público al régimen. Sobre esto debemos destacar que el conjunto de las acciones representaron un actor relevante, aunque lejano a los militares y de intencionalidades mucho más difusas a los de éstos y los municipios, principales protagonistas de esta forma de intervención del espacio público.

Pero hay otro sujeto que intervino en estas prácticas: las mujeres. A continuación quisiéramos indagar acerca del rol de ellas en los operativos, específicamente en relación a Cema, instituciones benéficas y organismos públicos.

Como ya hemos mencionado, los Centros de madres (Cema), en conjunto con instituciones de ayuda social como la Cruz Roja y el voluntariado femenino, organizaron operativos cívicos con un fuerte despliegue comunicacional. En los barrios populares estas intervenciones representaron una forma de relación entre los ciudadanos y el estado, relación marcada por el paternalismo y la presencia vigilante de las fuerzas armadas.

Cema realizó una colaboración con carabineros para celebrar un nuevo aniversario de la institución, lo cual cristalizó en un operativo cívico desarrollado en abril de 1980 en La Granja, Santiago. Con esto se va afianzando en los operativos analizados una relación de cooperación entre organizaciones de mujeres y carabineros, en el contexto de la acción social paternalista que el régimen privilegió:

Un operativo cívico-militar realizó la Dirección de Instrucción y el Instituto Superior de Carabineros, en la comuna de La Granja, por celebrase el 53º aniversario de la institución. Con la colaboración de CEMA Chile se llevó a la población atención médico-dental, social, jurídica y veterinaria...

Al mismo tiempo CEMA Chile instaló un bazar de ropa, donde la gente pudo comprar algunos artículos a precios módicos. Por ejemplo una polera para un niño de 15 años costaba \$ 15 y un pantalón \$ 10 (*El Mercurio*, 20-04-1980: C7).

De aquí en adelante podemos observar una serie de operativos que aumentaban cuando se acercaba la fecha de aniversario del golpe de estado. En esos eventos es frecuente visualizar a las organizaciones del voluntariado trabajando con militares y policías en acciones sociales, fundamentalmente médicas y jurídicas. Así ocurre también en zonas rurales, como Molina, región del Maule, en septiembre de 1983, cuando contingentes de carabineros, municipio y voluntariado femenino se hacen cargo de un operativo de salud en la localidad de Entre ríos.

Pese a lo anterior, la labor de asistencia tuvo puntos que guardaron relación con la imagen de la mujer del dictador, como en agosto de 1986 cuando la prensa publicó la

entrega de uniformes escolares en Quinta Normal, Santiago. En esta ocasión se hizo especial énfasis en que la iniciativa nacía de Lucía Hiriart, en el marco de un nuevo aniversario del once de septiembre.

La entrada del invierno es otro momento en el que las instituciones de voluntariado femenino, Cruz Roja y Cema Chile organizaron operativos cívico-militares. En mayo de 1984 un barrio de Renca, Santiago, no sólo recibió la ayuda social tradicional, también se instaló un bazar para la venta de ropa barata y medicamentos a precios reducidos. Este operativo se repitió en otras zonas de la comuna, cubriendo a más de cinco mil beneficiarios como se consignó por los organizadores:

Cinco mil 399 personas de escasos ingresos, correspondientes a las unidades vecinales 30 y 32 de Renca, fueron beneficiadas ayer con un operativo cívico-militar efectuado en la población Juan Antonio Ríos.

En la oportunidad, a las familias en situación de extrema pobreza se les prestó atención en las áreas de enfermería, obstetricia, zoonosis, medicina general, odontología, zapatería y peluquería, entre otras.

Asimismo, se mantuvo abierto un bazar y un puesto para la entrega de remedios recetados a los vecinos por los distintos especialistas.

En la acción social participaron personal municipal, Ejército de Chile, Carabineros, Defensa Civil, Cruz Roja y entidades del voluntariado (El Mercurio, 17-05-1984: C7).

Ya en los últimos meses de la dictadura el entramado de instituciones femeninas se confirmaba. Podemos estimar la tipología de los sujetos que intervino en los espacios poblacionales más carenciados, ejerciendo la presencia del régimen dictatorial en los sectores que se preveían como enemigos políticos de la estructura gubernamental de facto.

Los municipios prestaron fuerte apoyo en la generación de las distintas acciones y, en contadas ocasiones, reparticiones de la administración como ministerios y servicios realizaron algún operativo. Como tercer elemento de este análisis, buscaremos cómo los funcionarios de estado y municipios desarrollaron acciones de intervención social.

En 1982, en plena crisis recesiva, los operativos cívico-militares aumentaron, destacando los desarrollados en la capital en los meses de agosto y septiembre. Fueron las municipalidades los organismos más activos en atender la demanda de campamentos y barrios carenciados en los que arreciaba la falta de alimentos y recursos de todo tipo. Las acciones se centraron en la alimentación.

Las municipalidades utilizaron de manera progresiva los operativos cívico-

militares como forma de acción social y celebración política. Ejemplo de ello es lo ocurrido en Chillán (Bio-Bio), donde el aniversario de esa comuna fue conmemorado con una de estas intervenciones en un sector rural de su término municipal.

También en el ámbito de las celebraciones con motivo del golpe de estado, surge la intendencia regional metropolitana como un ente organizador de primer nivel. Fueron ellos quienes coordinaron los diversos operativos por las comunas más populosas de la capital, incorporando nuevos actores a estas intervenciones, como es el caso de gendarmería, organismo de vigilancia penitenciaria. El intendente Carol Urzúa, apareció frecuentemente durante los operativos junto a los pobladores. El 30 de agosto el intendente cayó muerto en un atentado organizado por el MIR:

El Intendente Metropolitano, general Carol Urzúa, respondió personalmente a las inquietudes de los pobladores de Renca, durante un operativo cívico militar que en esa comuna se realizará durante una semana. Esta madre, jefa de hogar, (fotografía) le consulta sobre las posibilidades de ingresar al POJH. Simultáneamente, en otras 18 comunas de Santiago se están realizando operativos similares (*El Mercurio*, 28-08-1983: C1).

Los ediles comenzaron a ser protagonistas en estos eventos, desplazando a los militares en operativos organizados y ejecutados por las municipalidades. Esta nueva estrategia se condijo con el acuartelamiento de los militares en medio de las protestas, por lo tanto la fuerza castrense no se encontraba operativa para la ayuda social.

Durante el invierno de 1984 se realizaron operativos organizados por las municipalidades en distintas comunas de Santiago, como en San Miguel cuando el ayuntamiento asumió la reparación de viviendas dañadas por el mal tiempo. En Renca organizaron un bazar con venta de ropa a menor precio que en el mercado, en esta ocasión volvieron a colaborar carabineros en la seguridad para el desarrollo de la acción social.

El terremoto de marzo de 1985 hizo que militares y policías volvieran a los operativos cívico-militares organizados y coordinados por los municipios de toda la región afectada, fundamentalmente Santiago, Valparaíso y O'Higgins. En esta eventualidad, la labor municipal y del funcionariado se redujo a la organización asumiendo un rol secundario.

Una respuesta directamente política contra las protestas se dio entre 1985 y 1986. Los sectores conflictivos de la capital fueron escenario de operativos cívico-militares durante este período, atendiendo a miles de personas. Sin duda, la intervención buscó refrenar los importantes avances que en barrios como los de San Miguel,

Santiago, realizaba el movimiento popular de resistencia a la dictadura; sectores de este movimiento evaluaban los operativos negativamente:

Las políticas asistenciales seguidas hasta ahora -anota el profesional- no implican desarrollo; son meros parches con que se tapan las lacras sociales. El gasto social, agrega, ha sido un Mejoral para una fuerte jaqueca, porque no ha habido inversión sostenida sobre el mal que ocasiona el dolor de cabeza".

Poco aportan al desarrollo esos despliegues cívico-militares que se hacen presentes en las poblaciones para cortarles el pelo a los jóvenes y niños (*Solidaridad*, N° 212: 21).

En julio de 1986, en un ambiente político enrarecido por múltiples protestas y acciones paramilitares del FPMR, la Intendencia regional metropolitana junto a los alcaldes señalaron la intensificación de los operativos, pero esta vez por una nueva motivación: la delincuencia. En ésta se encontró un argumento para intervenir los barrios avalados ante la ciudadanía por la justificación de la causa.

La dinámica propia de los operativos fue afianzando las relaciones entre municipios y cuerpos de las fuerzas armadas. Durante los últimos años de la dictadura se fueron generando, básicamente en comunas rurales, un sinnúmero de estas intervenciones de control social, como en agosto de 1986, cuando hubo un operativo conjunto entre la municipalidad de Colina, Santiago, y el ejército.

A partir de 1987 los operativos van desapareciendo, siendo sustituidos por la agenda política de la transición, tanto en la calle como en los despachos. Los municipios urbanos centraron su acción social en las tareas propias de sus competencias y presentaron sus aniversarios o, como en el caso de Cerro Navia, Santiago, una fiesta navideña con masiva entrega de regalos:

Los funcionarios fueron protagonistas involuntarios de políticas organizadas por la autoridad en el municipio, la intendencia o los ministerios. Su compromiso no tuvo el carácter marcadamente político de las acciones que protagonizaron jóvenes y mujeres. Ello no obsta a que el compromiso institucional de las municipalidades no fuera importante, muy por el contrario, estas organizaciones, supuestamente autónomas del estado, se alinearon íntegramente con las disposiciones del gobierno central.

Entre los protagonistas de las intervenciones los militares y policías estuvieron en primera línea. A continuación veremos las especificidades de sus actuaciones y cómo se involucraron en esta política de control social en la periferia que definió el régimen.

En septiembre de 1982, año en que las protestas populares ya se dejaban sentir y auguraban un futuro incierto para la tranquilidad política del régimen, los operativos se

siguieron desarrollando, el rol de Carabineros en los operativos es cada vez mayor, siendo evidente la baja en las intervenciones de los militares. Observamos lo anterior en el apoyo a la escuela de La Pincoya de Conchalí, Santiago, por parte de la Academia Superior del cuerpo policial.

En 1983 los operativos cívico-militares cambiaron su frecuencia, claramente en alza en las zonas urbanas, aunque la presencia siguió estando en zonas rurales como en el recién mencionado barrio La Pincoya, muy activo en protestas del ciclo de movilizaciones anti dictatoriales. Lo anterior visibiliza que el dispositivo de intervención fue utilizado para vigilar un barrio conflictivo, aunque en el discurso oficial esto no aparezca.

Pero el ejército no se restó del todo, de hecho, a pesar de la muerte del intendente Carol Urzúa, mayor general del ejército, la Escuela Militar decidió continuar con su acción en Melipilla, Santiago. La prensa informó del gesto como un síntoma de normalidad. En el operativo colaboraron con voluntariado femenino y la municipalidad:

A pesar del asesinato del Intendente de la Región Metropolitana, Mayor General Carol Urzúa, la Escuela Militar del Libertador Bernardo O'Higgins prosiguió ayer con sendos operativos cívicos en beneficio de la población melipillana. Tres mil quinientas personas recibieron atención médica, dental, enfermería, veterinaria, peluquería, gasfitería, zapatería, carpintería y electrodomésticos. La acción social entregada conjuntamente con Cema-Chile y la Municipalidad de Melipilla, estuvo amenizada por la Gran Banda Instrumental del Instituto Castrense (*El Mercurio*, 1-09-1983: C3).

En noviembre de 1983 se realizó un operativo en una escuela de Renca. Este formato de operativo se hizo mucho más frecuente durante los años de las protestas. Fundamentalmente, corresponde a un cambio de escenario según el cual se optó por espacios cerrados más seguros, como escuelas de administración municipal. En las zonas rurales no hubo cambios de este tipo, continuando con el funcionamiento clásico de los operativos.

Hacia 1984 estos procedimientos se encontraban plenamente naturalizados, y cada rama de las fuerzas armadas y carabineros desarrollaba sus propias acciones, generando una política propia para las correspondientes propagandas e intervenciones. En julio de ese año la policía uniformada realizó diferentes acciones propias en puntos de la región metropolitana, con recursos de la institución y sin colaboraciones de otras instancias civiles ni militares. Carabineros fue la rama más activa en el desarrollo de estas intervenciones en barrios periféricos y zonas alejadas del país.

Todo lo anterior no resta que las diferentes ramas militares no hayan realizado

operativos cívico-militares, tal cual lo hacían los municipios e intendencias para conmemorar los aniversarios del golpe de estado. En 1984 las diversas ramas militares fueron particularmente activas en coordinar este tipo de acciones, lo hicieron la Fach y el ejército de forma masiva en las comunas del gran Santiago. Pero en 1985 el rol de los militares demostró directamente el vínculo entre los operativos sociales y la represión:

En la madrugada del 13, alrededor de diez u once hombres asaltaron la vivienda del dirigente José Manuel Maturana, quien alcanzó a huir semidesnudo hacia unos potreros. Su mujer fue violada y todos los enseres del hogar destruidos (recuadro).

El 14 de febrero se realizó un operativo cívico-militar. Los uniformados atendieron a mujeres, hombres y niños, cortándoles el pelo, revisando sus dentaduras e hicieron chequeos médicos...

Días antes circularon profusamente panfletos que decían: "Campamento Monseñor Francisco Fresno. Poblador: Con resultados concretos les decimos que vamos avanzando con la verdad. Después de la reunión con el Sr. Intendente nos conseguimos para empezar 168 POJH con los que se pudieron financiar 168 familias de nuestro campamento. Por esto y por la solución de nuestras viviendas apoya a nuestra directiva que defiende los derechos del poblador y que es reconocida por las autoridades. Firmado, Directiva Comité de Pobladores Independientes (*Solidaridad*, N° 196: 15).

Los operativos cívico-militares se sucedieron de manera permanente en el año 1985. Aquí se produjeron muchos operativos y se destacaba en los medios el número de personas atendidas por estas acciones. Lo anterior se entiende por el catastrófico estado de la zona central del país tras el terremoto de marzo de ese año, siendo por ello que Carabineros atendió a más de tres mil personas en San Francisco de Mostazal y Santa Rosa de Pelequén, región de O'Higgins. Esto se repitió en múltiples comunas de la zona afectada, también lo hacen las otras ramas militares. Con todo lo anterior, Carabineros no dejó de aludir su aniversario a fines de abril.

En 1986 y cuando la situación política se decantaba por la transición pactada, los operativos se mantuvieron con mayor participación civil. Hacia mediados de ese año se intensificaron estas acciones en Santiago por instrucciones de la intendencia. Los operativos continúan realizándose en escuelas y colegios, tomando el carácter de ayuda filantrópica del voluntariado más que el de la acción militar que le dio origen. La novedad la aportó el movimiento social que mostró su rechazo a los operativos identificados con el régimen militar:

Ocho mil personas de las cuatro unidades vecinales de la población La Legua fueron beneficiadas ayer con un operativo cívico-militar, organizado por la municipalidad de San Miguel y contó con el apoyo de efectivos de la Segunda División de Ejército...

Sobre la acogida que tuvo el operativo cívico-militar entre los pobladores, expresó: "Fue muy buena. Con esta acción se entendieron las necesidades básica de un gran número de personas, y ése era nuestro principal objetivo".

El Alcalde Murúa reconoció que unas 40 personas lanzaron consignas contra este operativo.

“Pero por un pequeño grupo no íbamos a dejar de lado a los otros 20 mil habitantes de esta población” recalcó (*El Mercurio*, 3-06-1986: C4).

En agosto de 1986 carabineros hizo balance de sus operativos cívicos resaltando la cantidad de personas beneficiadas, fue el cuerpo más activo desde iniciada la década. Por su parte, el ejército realizó variadas acciones sociales celebrando un nuevo aniversario del golpe de estado en conjunto con los organismos de voluntariado. La FACH realizó acciones acotadas para celebrar el aniversario.

Los últimos años de la dictadura continuaron viendo el desarrollo de operativos cívico-militares, aunque sin la frecuencia que tuvieron en el primer lustro de los ochenta. En 1987 los operativos de fuerzas militares se redujeron a la ayuda para damnificados por tempestades en el invierno y a las consabidas conmemoraciones del golpe de estado de 1973.

La conmemoración como motivante de los operativos

Un elemento que contextualizó los operativos cívico-militares fueron las fechas importantes para las instituciones que las llevaban a cabo, particularmente las militares, tal como lo comprobamos con lo sucedido durante los once de septiembre. Podemos observar la estrecha relación entre los aniversarios militares y policiales, además de las ejecuciones de operativos de ayuda social, particularmente frecuente en la fuerza de carabineros. Del mismo modo, conviene señalar que la presentación en los medios de comunicación ayudó profusamente a configurar esa cara más política. Con el devenir de los años dictatoriales, las fechas de carácter político fueron sumándose y develando ese sentido en los operativos.

Los hechos políticos importantes del período también fueron trabajados públicamente desde estas intervenciones, algunos de ellos son la experiencia guerrillera del MIR en el sur de Chile, la promulgación de la nueva constitución o las labores en la carretera austral; todos ellos nos resultan relevantes para entrar en el análisis de los operativos cívico-militares. Veamos que nos señala la prensa sobre estos sucesos.

En noviembre de 1973 se informó de las incursiones militares en la selva valdiviana, el contingente se acompañó de personal médico para los habitantes de este sector de difícil acceso. En este sector existió un enfrentamiento armado en el retén policial de Neltume, zona de trabajo político izquierdista y donde se registró, hacia fines de la década del setenta, un experimento de foco guerrillero del MIR (Bravo, 2012). En lo sucesivo nos interesa destacar la presentación de actividades de ayuda social para

enmascarar la ocupación militar de la zona.

Por otra parte, encontramos operativos en momentos y con motivaciones fuera de los descritos. En abril de 1980, el intendente de la región austral de Aysén realizó operativos de carabineros y voluntariado. Destacamos estos hechos, relativos al inicio de obras de la carretera austral, en la perspectiva geopolítica de integración del territorio. Los operativos cívico-militares no fueron una práctica frecuente en este territorio, sin embargo y sólo en esta ocasión existieron estas intervenciones:

El aislamiento geográfico en que viven, pocas expectativas de un trabajo bien remunerado, alto costo de vida, dificultades de acceso y de transporte, insuficiencia para resolver problemas de salud, falta de medios de cultura y creación, y actividades de educación son solo algunos de los problemas que afectan a los habitantes del litoral norte de la Undécima Región. Ello hace difícil su desarrollo y la incorporación del potencial humano necesario para su crecimiento. Para detectar soluciones a estos problemas y bosquejar una serie de acciones que, coordinadas por la Oficina de Desarrollo Social, impliquen una preocupación constante por el mejoramiento de estos pobladores, los más marginales de Aysén, partió un operativo cívico y social que encabezó el Intendente, coronel Samuel Rojas Pérez (*El Mercurio*, 23-04-1980: C9).

Estos dispositivos de propaganda e intervención se aplicaron de nuevo en agosto de 1981 en sectores rurales de Panguipulli, al interior de Valdivia, zona específica en la cual se desarrolló el foco brutalmente aniquilado por el ejército. Podemos observar los diversos operativos instalados en esta zona de poca población y alejada de centros urbanos importantes.

Para septiembre del mismo año, los regalos y atenciones para la población de la zona fueron considerables, pues más de cincuenta vehículos militares se internaron en el área para reparar casas y entregar ropa, alimentos, medicamentos e incluso, televisores y máquinas de coser. La prensa relató las ceremonias cívicas con las que culminaron los operativos. Este elemento también lo hemos visto en zonas rurales, especialmente en las extremas, no así en las ciudades ni en la zona central del país:

Entre los elementos que serán entregados en esta oportunidad figuran tres ambulancias que estarán a cargo del traslado de enfermos que requieren una atención médica más completa en centros asistenciales de Valdivia. Los habitantes recibirán a partir de mañana jueves zapatos, botas, vestuario, frazadas, materiales de construcción, televisores, máquinas de coser y medicamentos.

Al igual que en Santiago y otras ciudades del país, se procederá a reparar a escuelas y policlínicas.

En forma prioritaria recibirán atención 18 establecimientos educacionales, un número igual de centros de madres y tres juntas de vecinos.

Se dictarán charlas acerca de la nueva Constitución Política, el traspaso de las escuelas a las municipalidades y la asignación especial a menores de familias en estado de extrema pobreza (*El Mercurio*, 3-09-1981: A14).

En mayo de 1982 la zona de Panguipulli y Neltume, en Valdivia, aún era destacada en la prensa, al tiempo que se informaba de la baja en los niveles de desempleo de la zona, se precisaba que la zona había sido un área de desarrollo guerrillero del MIR, y de ahí la importancia de intervenirlo.

En marzo de 1984 se efectuó un operativo cívico-militar, en su formato tradicional, organizado por la municipalidad para celebrar el tercer aniversario de la Constitución. En la comuna santiaguina de Ñuñoa se repararon artefactos eléctricos y las acciones sociales corrieron por parte de la Secretaría Nacional de la Mujer y el voluntariado, además se contó con la participación de la Escuela Militar. Este acto de evidente contenido político no prosperó en el tiempo, la constitución no resultó ser un hecho político convocante para los operativos.

En 1986, y en el contexto de Pinochet nominado como posible candidato a un nuevo período dado los nuevos marcos constitucionales, se descubrieron importantes arsenales destinados a la actividad del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Estos hechos coinciden con una fuerte actividad de los operativos cívico-militares, cuestión que fue profusamente informada por los medios de comunicación:

La realización de operativos cívico-militares son permanentemente requeridos por los pobladores y continuarán efectuándose luego de Fiestas Patrias”, señaló el Intendente metropolitano, mayor general Osvaldo Hernández.

Ante una consulta periodística, precisó que son “los propios pobladores quienes solicitan a la autoridad que estos operativos se efectúen con mayor frecuencia, en consideración a los múltiples beneficios que brindan a las clases más necesitadas.

En el transcurso del año se han realizado 207 operativos en las 41 comunas de la Región Metropolitana, descontando el calendario masivo dispuesto para agosto y septiembre, en celebración del día de la liberación nacional (*El Mercurio*, 22-09-1986: C4).

Estos operativos cívico militares fueron masivos y mayoritariamente urbanos dirigidos por la autoridad política y con la intención de atraer a la opinión pública fuera de la propaganda política rodriguista.

Conclusiones

En diversas coyunturas políticas los operativos cívico-militares se hacían notar en los diversos espacios públicos, sobre todo en las poblaciones populares la prensa dio tribuna a estas acciones de intervención. En las protestas y atentados importantes, en las acciones de violencia política y en eventos masivos como las consultas y plebiscitos, los operativos aparecían con más fuerza mediática y en mayor número.

Podemos distinguir dos etapas claramente definidas en torno a los operativos

cívico-militares, la primera fuertemente planificada por el régimen y su gobierno hasta 1980 y una segunda, que tuvo un sentido más propagandístico donde fueron utilizados como dispositivo de intervención dirigido por las ramas de las fuerzas armadas y los municipios fundamentalmente.

Como hemos visto, los operativos cívico-militares funcionaron como un dispositivo de intervención eficaz en el espacio público de la periferia desde donde se articulaba el movimiento social y la resistencia política. Por otra parte, las acciones de este tipo ayudaron a visibilizar políticamente a los adherentes del régimen a través de sus prácticas sociales, todo ello matizado por su cercanía mayor o menor a los militares.

Los trabajos voluntarios de los estudiantes universitarios, que revisaremos en el siguiente capítulo, tuvieron un sentido político en sus acciones, pues, aunque sin los recursos del estado ni las mismas definiciones, son maneras similares de intervenir el espacio público. Hay una tensión entre estas dos maneras contemporáneas de intervenir los espacios, ambas igual de complejas dada sus diversas lecturas políticas, sociales y culturales. También se puede entender la disputa del espacio público por estas formas de intervención, así como la elaboración de identidades en torno a estas modalidades de acción social.

Pero las manifestaciones de carácter abiertamente político no se dieron en estos operativos, debido a que existieron concentraciones, actos y ceremonias que expresaron este aspecto de la adhesión al régimen pinochetista. A continuación, analizaremos esas manifestaciones.

Fuentes y Bibliografía.

Fuentes

El Mercurio

Revista Cauce

Revista Ercilla

Revista Solidaridad

Bibliografía

ÁLVAREZ, Rolando, Karen DONOSO, Sebastián LEIVA, Julio PINTO, Verónica VALDIVIA (2008). *Su revolución contra nuestra revolución. Vol. II. La pugna marxista-gremialista en los ochenta*, Santiago de Chile: LOM.

ÁLVAREZ, Rolando, Karen DONOSO, Verónica VALDIVIA (2013). *La alcaldización de la política. Los municipios en la dictadura pinochetista*, Santiago de Chile: LOM.

CHATEAU, Jorge y otros (1987). *Espacio y poder: los pobladores*, Santiago de Chile: Flacso.

CORREA, Sofía (2005). *Con las riendas en el poder. La derecha chilena en el siglo XX*,

Santiago de Chile: Sudamericana.

DE LA MAZA, Gonzalo, Mario GARCÉS (1985). *La explosión de las mayorías. Protesta nacional 1983-1984*, Santiago de Chile: Eco.

FFRENCH-DAVIS, Ricardo (2008). *Chile entre el neoliberalismo y el crecimiento con equidad: reformas políticas económicas desde 1973*, Santiago de Chile: LOM.

HUNEEUS, Carlos (2005). *El régimen de Pinochet*, Santiago de Chile: Sudamericana.

ILLANES, María Angélica (1994). “Marginalización y des-marginalización del movimiento popular” *Proposiciones*, Santiago de Chile, 24.

MOULIAN, Tomás (1982). Fases del desarrollo político chileno entre 1973 y 1978, *Documento de Trabajo, FLACSO*, Santiago de Chile, N° 155.

QUIROGA, Patricio (1998). “Las jornadas de protesta nacional: Historia, estrategias y resultados”, *Encuentro XXI*, Santiago de Chile, Año 4 N° 11.

SALAZAR, Gabriel (2012). *Movimientos sociales en Chile. Trayectoria histórica y proyección política*, Santiago de Chile: Uqbar.

SILVA, Camila (2012). “La política sobre el territorio: La construcción política del territorio poblacional en los albores del neoliberalismo. Chile, 1973-1980”, *Pretérito Imperfecto*, Santiago de Chile, 1.

VALDÉS, Teresa, Marisa WEINSTEIN, María Isabel TOLEDO, Lilian LETELIER (1989). “Centros de madres 1973-1989 ¿sólo disciplinamiento?”, *Documento de Trabajo, FLACSO*, Santiago de Chile, 416.